

SISTEMA EUROPEO

LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE LOS MALOS TRATOS

José M.^a Mohedano Fuertes

*Miembro español del Comité Europeo
para la Prevención de la Tortura*



A tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes son sancionados por las legislaciones de los Estados democráticos y por varios instrumentos internacionales. Sin embargo, la experiencia plantea la necesidad de medidas internacionales más eficaces para reforzar la seguridad de las personas privadas de libertad.

El sistema de vigilancia establecido por el Consejo de Europa en la Convención de Derechos Humanos y de Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1960, basado en las demandas presentadas por los ciudadanos o por los Estados invocando violaciones de derechos humanos, ha obtenido resultados importantes pero podía ser completado con un mecanismo no judicial, de carácter preventivo, que tendría como tarea examinar el trato de las personas privadas de libertad para garantizar su protección contra la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes.

Por eso, el 28 de septiembre de 1983, la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa adoptó la recomendación 971 (1983) sobre protección de las

personas privadas de libertad. En esta recomendación la Asamblea instaba particularmente al Comité de Ministros para que adoptara el proyecto anexo de Convención europea contra la tortura y las penas inhumanas o degradantes que se edificaba sobre la creación de un Comité habilitado para visitar en cualquier lugar de los Estados parte de la Convención a las personas privadas de libertad por una autoridad pública.

Después de haber consultado a la Asamblea parlamentaria, el Comité de Ministros adoptó el texto de la Convención el 26 de junio de 1987, que quedó abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa el 26 de noviembre de 1987.

LA CONVENCION EUROPEA PARA LA PREVENCION DE LA TORTURA

La elaboración de la Convención y la creación del Comité para la prevención de la tortura (CPT) han constituido unas iniciativas revolucionarias de la comunidad internacional. Por primera vez, un grupo de Estados ha instituido un órgano internacional de expertos independientes dotado de amplios poderes de *control* en el terreno de los derechos humanos.

Antes de exponer las conclusiones o las propuestas más relevantes derivadas de las actividades del CPT durante sus dos primeros años de existencia, creo que es útil describir sus características más notables y, sobre todo, las diferencias entre el CPT y los otros dos Organos de control del Consejo de Europa en materia de derechos humanos: la *Comisión Europea* y el *Tribunal Europeo de Derechos Humanos*.

A diferencia de la Comisión y del Tribunal, el Comité para la Prevención de la Tortura no es un órgano jurisdiccional ni resuelve litigios jurídicos relativos a alegaciones de violación de obligaciones resultantes de un Tratado. En realidad, el CPT es ante todo y principalmente un *mecanismo de prevención de malos tratos* aunque puede, en ciertas situaciones, intervenir después de que estos hechos hayan sucedido. Pero mientras las actividades de la Comisión de derechos humanos y el Tribunal buscan la resolución del conflicto en el plano jurídico, la actuación del CPT se enfoca hacia la supresión de un conflicto en la dinámica institucional.

Para cumplir su objetivo el CPT debe examinar un extenso abanico de cuestiones para determinar no solamente si existe un riesgo inminente de malos tratos, sino también si las condiciones o circunstancias pueden degenerar en malos tratos: derechos reconocidos a las personas privadas de liber-

tad; procedimientos de detención y de interrogatorio; procedimientos disciplinarios; *habeas corpus*; procedimientos penales; condiciones materiales de detención; programas de actividades; cuidados médicos y normas de higiene, etc.

Las actividades del Comité para la prevención de la tortura se basan en el *principio de cooperación*. La tarea del CPT no es tanto la de criticar públicamente a los Estados sino, más bien, la de asesorarlos y cooperar con ellos para que establezcan los medios que permitan reforzar el “cordón sanitario”, que separa los tratos o comportamientos aceptables de un trato o comportamiento inaceptable con las personas privadas de libertad. Para cumplir sus funciones, el CPT se guía por los siguientes principios:

1. La prohibición de malos tratos a las personas privadas de libertad tiene un carácter *absoluto*.
2. Los fundamentos sobre los cuales reposa todo comportamiento civilizado hacen generar repulsión hacia los malos tratos, incluso cuando revisiten las formas más moderadas.
3. Los malos tratos no solamente producen daño a sus víctimas sino que también son degradantes para quien los inflinge o autoriza.

UN COMITE PARA HACER INSPECCIONES

Los miembros del CPT se eligen a título individual entre personalidades de alta moralidad, conocidos por su competencia en materia de derechos humanos o por su experiencia profesional en el ámbito a que se refiere la Convención europea para la prevención de la tortura.

Entre sus miembros actuales hay juristas, diplomáticos, médicos, psicólogos, psiquiatras y expertos en regímenes penitenciarios.

El CPT examina mediante visitas periódicas o “ad hoc” la situación de hecho en los Estados y muy especialmente: a) procede al examen de las condiciones generales de los establecimientos visitados; b) observa la actitud de los responsables de la aplicación de las leyes y de los empleados públicos dedicados a la custodia de las personas privadas de libertad, y c) se entrevista sin testigos con las personas privadas de libertad.

A continuación el CPT envía un Informe al Estado concernido en el cual se hace un análisis de las informaciones recibidas y se formula un balance de sus observaciones. Si es necesario, el CPT recomienda cualquier clase de medidas para prevenir un eventual trato contrario a lo que podría ser razonablemente considerado como normas aceptables de comportamiento con las personas privadas de libertad. En el caso de que un Estado no ponga en

práctica las recomendaciones del CPT, éste puede hacer una declaración pública con toda la autoridad moral que le da el ser un órgano del Consejo de Europa.

En el ejercicio de sus funciones, el CPT debe de utilizar no sólo las normas jurídicas contenidas en la Convención europea de derechos humanos, sino también un cierto número de instrumentos jurídicos sobre derechos humanos, así como la interpretación que de ellos hacen los órganos de derechos humanos competentes. Sin embargo, *no está vinculado* por la jurisprudencia de los órganos judiciales o cuasi-judiciales que actúan en el ámbito de la tutela de los derechos humanos.

El CPT no excluye, y de hecho lo está considerando, la posibilidad de ir constituyendo progresivamente un *cuerpo de normas generales* sobre la manera de tratar a las personas privadas de libertad, con el fin de ofrecer a las autoridades nacionales un cierto número de principios directores que podrían ser útiles para mejorar las condiciones de detención o de encarcelamiento.

Mientras esta iniciativa no haya sido tomada por el CPT, considero que sería útil —respetando plenamente la regla de confidencialidad que figura en el párrafo 1 del artículo 11 de la Convención— entresacar ciertas cuestiones de fondo que llaman la atención en el curso de sus visitas y que son, además, mencionadas en sus Informes generales. Incluso, en el futuro, habrá que dedicar mayor atención a otras formas de privación de libertad diferentes de la detención y de la prisión: por ejemplo, la retención administrativa de extranjeros, el internamiento de enfermos mentales, la detención de los menores, la situación de los ancianos en residencias, etc.

DETENCION POR LA POLICIA

El CPT atribuye una importancia particular a tres derechos para las personas que son detenidas por la policía: el derecho de poder informar de su detención a un tercero de su elección (familiar, amigo, funcionario de un consulado, etc.); el derecho de tener acceso a un abogado, y el derecho de pedir un examen por un médico, además del examen efectuado por el médico empleado en la dependencia policial. Estos derechos constituyen tres garantías fundamentales contra los malos tratos a personas detenidas, que deberían aplicarse desde el comienzo de la privación de libertad, cualquiera que sea la descripción que de ella se haga en cada sistema legal nacional.

Las personas detenidas por la policía deben ser informadas explícitamente y sin retraso de todos sus derechos. Cualquier posibilidad de las

autoridades para retrasar el ejercicio de alguno de estos derechos debe estar claramente definida y su aplicación estrictamente limitada en el tiempo. Y tratándose particularmente del derecho al acceso a un abogado y del derecho a pedir un examen médico particular se debe evitar el retraso de su ejercicio, gracias a un sistema que permita elegir excepcionalmente abogados y médicos, a partir de listas preestablecidas elaboradas de acuerdo con las organizaciones profesionales competentes.

El acceso a un abogado por las personas detenidas debería comprender el derecho de establecer contacto con él y de recibir su visita —en condiciones que garanticen la confidencialidad de sus conversaciones— así como de que, en principio, esté presente durante los interrogatorios.

Respecto a los exámenes médicos de las personas detenidas, deberían efectuarse lejos de la escucha y, preferentemente, de la vista de los policías. Parece también recomendable que los resultados de cada examen, igual que las manifestaciones hechas por los detenidos y las conclusiones del médico, deban ser formalmente consignados por el médico y puestos a disposición del detenido y de su abogado.

INTERROGATORIO DE LOS DETENIDOS

Para el procedimiento de interrogatorio el CPT considera que deberían existir reglas o directrices claras sobre la manera en que deben ser llevados los interrogatorios de la policía. Estas reglas deberían tratar, entre otras, de las cuestiones siguientes: información sobre la identidad (nombre o número de matrícula policial) de las personas presentes durante el interrogatorio; los períodos de descanso entre los interrogatorios; las pausas durante un interrogatorio; los lugares en que se pueden desarrollar los interrogatorios; si puede exigirse que el detenido permanezca de pie durante el interrogatorio; los interrogatorios de personas que están bajo la influencia del alcohol o de las drogas. Debería igualmente exigirse que se consigne sistemáticamente el momento del comienzo y del fin de los interrogatorios así como toda petición formulada por un detenido en el curso de un interrogatorio y que haga mención a las personas presentes en él.

El Comité para la prevención de la tortura ha considerado reiteradamente que el *registro electrónico* de los interrogatorios policiales es otra garantía útil contra los malos tratos a los detenidos (al mismo tiempo que una ventaja nada despreciable para la policía).

Las garantías fundamentales reconocidas a las personas detenidas por la policía se verían reforzadas (y el trabajo de los funcionarios de policía, sin duda, facilitado) por la existencia de un registro de detención único y completo para cada una de dichas personas. En este registro deberían consignarse todos los aspectos de la detención de una persona y las medidas tomadas respecto a ella (momento de la privación de libertad y motivos de la detención; momento de la información de los derechos al detenido; señales de heridas y síntomas de trastornos mentales; momento en que los familiares o amigos y el abogado del detenido han sido contactados y momento en que ellos se han comunicado o visitado al detenido; horario de las comidas; períodos de los interrogatorios; horario de los traslados y de la puesta en libertad).

La detención por la policía debe ser, en principio, de una duración relativamente corta; aunque esta corta duración no les libre a los establecimientos de policía de contar con unas condiciones materiales de detención tan buenas como las de otros lugares en los que la privación de libertad se prolongue por un período más largo. Por tanto, un cierto número de condiciones materiales elementales deben ser reunidas.

Todos los calabozos de la policía deben tener una dimensión razonable en relación al número de personas máximo que puede recibir y una luminosidad suficiente para leer fuera de los períodos para dormir; los calabozos deberían, preferentemente, beneficiarse de la luz natural. Incluso, los calabozos deberían estar amueblados de forma que permitieran el reposo (por ejemplo, una silla o banqueta fija), y las personas obligadas a pasar la noche detenidas deberían poder disponer de colchones y de mantas.

Las personas detenidas por la policía deberían poder satisfacer sus necesidades naturales en el momento deseado, en condiciones higiénicas y de intimidad, y deberían disponer de posibilidades adecuadas para su limpieza personal. Estas personas deberían recibir alimentación a las horas normales, con una comida completa, al menos, cada día.

Definir cuál es la dimensión razonable de un calabozo policial no es una materia fácil, porque hay que tomar en cuenta numerosos factores para su evaluación. Sin embargo, las delegaciones del CPT han ido estableciendo una línea directriz aproximativa. El siguiente criterio —entendido más como nivel deseable que como norma mínima— es el que actualmente se utiliza como parámetro para los calabozos individuales: alrededor de siete metros cuadrados, con dos metros o más entre los muros y dos metros y medio cuadrados de altura.

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

El CPT debe examinar muchas cuestiones cuando visita una prisión. Naturalmente, presta una atención especial a las alegaciones de malos tratos hechas personalmente por los reclusos. Pero todos los aspectos de las condiciones de privación de libertad en una prisión son abarcados por el mandato del CPT. Los malos tratos pueden revestir múltiples formas y pueden resultar de una voluntad deliberada o pueden ser también el resultado de las deficiencias de la organización penitenciaria o de la insuficiencia de recursos. La calidad general de la vida en un establecimiento tiene, por tanto, para el CPT una importancia considerable. Y, especialmente, esta calidad de vida dependerá de las actividades que realicen los reclusos y del estado del conjunto de las relaciones entre presos y personal penitenciario.

Es muy importante atender al clima que reina dentro de un establecimiento penitenciario. Promover relaciones constructivas —por oposición a unas relaciones conflictivas— entre los reclusos y el personal penitenciario permitirá, sin duda, disminuir la tensión inherente a todo recinto penitenciario y reducirá sensiblemente la probabilidad de incidentes violentos y de los malos tratos que de ellos pudieran derivarse. Un espíritu de comunicación y de asistencia debe ir paralelo a la puesta en práctica de medidas de vigilancia. Todo ello lejos de poner en peligro la seguridad podría reforzarla.

La cuestión del hacinamiento o de la superpoblación penitenciaria concierne directamente al mandato que tiene el Comité para la prevención de la tortura. Los servicios y las actividades en el interior de una prisión no pueden cumplir sus objetivos si abarcan a un número de reclusos que no están o estaban previstos para una determinada prisión. La calidad general de la vida en el establecimiento se resentirá, y puede ser que de una manera muy significativa. Es más, el grado de superpoblación de una prisión, o de una parte de ella, puede ser de tal envergadura que constituya, él sólo, un trato inhumano o degradante, en opinión del CPT.

Un programa satisfactorio de actividades (trabajo ocupacional, enseñanza y deporte) reviste una importancia capital para el objetivo de reinserción de los reclusos. Esto es válido para todos los establecimientos, ya sean de ejecución de penas o de prisión provisional. El CPT ha observado que las actividades de muchas prisiones europeas destinadas a la prisión provisional son extremadamente limitadas. La organización de los programas de actividades en estos establecimientos, que tienen una rotación bastante rápida de los detenidos, no tiene una solución satisfactoria. Es evidente que no se puede llevar a cabo programas de tratamiento individualizado del tipo de los que se

podía esperar de un establecimiento para penados. Sin embargo, los reclusos no pueden ser dejados a su suerte, vegetar durante semanas y semanas, a veces meses, confinados en su calabozo, aunque las condiciones materiales de los mismos fueran buenas. En este sentido el CPT considera que el objetivo consistiría en asegurar que los reclusos en los establecimientos de prisión provisional estén en condiciones de pasar una parte razonable de la jornada (ocho horas o más) fuera de su celda, ocupados en actividades ocupacionales de diversa naturaleza. En los establecimientos para penados el régimen de estas actividades debe ser, evidentemente, de un nivel todavía más intenso.

El ejercicio al aire libre requiere una mención específica. La exigencia según la cual los reclusos deben estar autorizados a realizar cada día al menos una hora de ejercicio al aire libre está ya extensamente admitida como una garantía fundamental (preferentemente, este ejercicio debería ser parte integrante de un programa más extendido de actividades). En sus informes el CPT ha señalado que *todos los penados sin excepción* (incluso los que están sometidos a aislamiento celular como consecuencia de una sanción) deben beneficiarse diariamente de algún ejercicio al aire libre. Es igualmente evidente que las áreas de ejercicio exteriores deberían ser razonablemente espaciales y, cada vez que sea posible, ofrecer un abrigo contra la intemperie en climas especialmente rigurosos.

El acceso, en el momento deseado, a las zonas de aseo personal suficientemente decorosas y mantenidas en buenas condiciones de higiene son también elementos esenciales de un entorno humano.

A este respecto, se debe subrayar que no es aceptable la práctica constatada en ciertos países de que los reclusos deban satisfacer sus necesidades naturales utilizando unos cubos situados en su propia celda, que sólo son vaciados a horas fijas. La solución debería consistir en instalar un inodoro dentro de la celda (preferentemente en un anexo sanitario), o bien deberían instrumentarse los medios que permitieran a los reclusos salir de la celda en cualquier momento (incluso durante la noche), suficientemente vigilados, para acudir a los servicios, sin retraso indebido.

Los reclusos deberían también tener un acceso regular a las duchas o a los baños. Es más, sería deseable que las celdas fueran equipadas con agua corriente.

Es especialmente preocupante constatar que en un mismo establecimiento se combina la superpoblación penitenciaria, los regímenes pobres en actividades y un acceso inadecuado a los servicios y a los locales sanitarios. El efecto acumulado de todas estas circunstancias puede resultar, y de hecho resulta, extremadamente nefasto para los reclusos.

Es igualmente esencial para los reclusos mantener contactos adecuados con el mundo exterior. Por encima de todo, los reclusos deben poder mantener relaciones con su familia y con sus amigos más próximos. El principio director debería ser el de promover el contacto con el mundo exterior; cualquier limitación a estos contactos debería estar basada exclusivamente en imperativos realmente serios de seguridad o en consideraciones vinculadas a los recursos disponibles.

En este contexto, se pone de manifiesto la necesidad de una cierta flexibilidad en la aplicación de las reglas de visitas y de contactos telefónicos respecto a los reclusos cuyas familias viven muy lejos de la prisión (y que hacen casi imposible las visitas regulares). Por ejemplo, tales reclusos podrían ser autorizados a acumular varias visitas o se les podría ofrecer mejorar los contactos telefónicos con su familia.

Naturalmente, el CPT ha mostrado una especial atención a los problemas particulares que afectan a ciertas categorías específicas de penados como, por ejemplo, las mujeres, los jóvenes y los extranjeros.

El personal penitenciario será constreñido a utilizar la fuerza sólo con ocasión de controlar a los reclusos violentos, y sólo también, excepcionalmente, puede también tener necesidad de hacer uso de los instrumentos de contención física. Pero siempre desde la perspectiva de que estas situaciones son claramente de alto riesgo porque en ellas se pueden producir malos tratos a los detenidos y, por tanto, exigen garantías específicas.

Un recluso contra el que se ha hecho uso de la fuerza debería tener el derecho de ser examinado inmediatamente por un médico y, si es necesario, recibir un tratamiento. Este examen debería ser llevado a cabo fuera de la escucha y, preferentemente, fuera de la vista del personal penitenciario no médico y los resultados del examen (incluidas todas las declaraciones pertinentes del recluso y las conclusiones del médico) deberían consignarse expresamente y ser puestas a disposición del recluso. En las raras ocasiones en que sea necesario hacer uso de instrumentos de contención física, el recluso que ha sido sometido a los mismos debería ser colocado bajo vigilancia constante y apropiada. De otra parte, los instrumentos de contención deberían dejar de utilizarse lo antes posible.

Estos instrumentos no deberían jamás utilizarse con ocasión de una sanción, como sorprendentemente todavía sucede en algún país europeo. Por último, debería existir un registro en el que se consignara cada caso en el que ha sido utilizada la fuerza en contra de uno o varios reclusos. Unos procedimientos sencillos para entablar demandas, y una inspección eficaz son

una garantía fundamental contra los malos tratos dentro de las cárceles. Los reclusos deben disponer de vías de recurso tanto en el sistema penitenciario como fuera de aquél, y así se beneficiarían de la posibilidad de un acceso confidencial a una autoridad apropiada. El CPT atribuye una importancia especial a que un órgano independiente (por ejemplo, una Comisión de Inspectores o un Juez encargado de la vigilancia o inspección penitenciaria) realice visitas a todos los establecimientos penitenciarios y esté habilitado para recibir las demandas de los reclusos (y si es necesario, para tomar las medidas pertinentes) y para proceder a la visita de la prisión. Estos órganos pueden, entre otros, jugar un papel importante para allanar las diferencias entre la dirección penitenciaria y un recluso o los reclusos en general.

Resulta del interés, tanto de los reclusos como del personal penitenciario, que procedimientos disciplinarios transparentes sean a la vez formalmente establecidos y llevados a cabo en la práctica. Toda zona de sombra en esta materia comporta el riesgo de que se desarrollen sistemas no controlados. Los procedimientos disciplinarios deberían garantizar al recluso el derecho de ser escuchado sobre la infracción que se le imputa haber cometido y de poder recurrir ante una Autoridad superior cualquier sanción.

Paralelamente a los procedimientos disciplinarios formales, se producen con frecuencia otros procedimientos en función de los cuales un recluso puede ser separado de forma no voluntaria de otros prisioneros por razones derivadas de la disciplina o de la seguridad (por ejemplo, en razón del interés del "buen orden" dentro de la prisión). La puesta en práctica de estos procedimientos debería igualmente rodearse de garantías eficaces. El recluso debería ser informado de las razones de la medida tomada en su contra (salvo si graves imperativos de seguridad no lo aconsejaran), tener la posibilidad de explicar sus alegaciones sobre la cuestión y la posibilidad, también, de impugnar la medida ante una Autoridad apropiada.

El CPT atribuye una importancia especialmente particular a los reclusos que por cualquier razón (motivos disciplinarios, "peligrosidad" o comportamiento "perturbador", por el interés de una investigación criminal, o por su propia petición) son colocados en condiciones que tienen toda la apariencia de una medida de aislamiento.

El principio de proporcionalidad exige que se busque un equilibrio entre la medida de régimen de aislamiento y la causa que lo determine, ya que este tipo de medida puede tener unas consecuencias absolutamente nefastas para la persona a quien se le aplica. *La medida de aislamiento puede constituir, en ciertas circunstancias, un trato inhumano y degradante.* En todo caso, todas las clases de aislamiento deberían tener una duración lo más breve posible.

Cuando se impone un régimen de este tipo, una garantía esencial es la de que cada vez que el recluso o que un empleado penitenciario por cuenta del recluso, solicita un médico, éste sea llamado sin retraso a fin de examinar al recluso. Las conclusiones del examen médico, comportando una apreciación de su estado psíquico y mental, y si es necesario, las consecuencias previsibles de la prolongación del aislamiento, deberían figurar en informe escrito, que se debe transmitir a las autoridades competentes.

Otra práctica sobre la que el CPT se ha interesado es el traslado de los reclusos considerados como elementos perturbadores. Es cierto que algunos reclusos son muy difícilmente controlables y que su traslado a otro establecimiento puede resultar a veces necesario. Sin embargo, el traslado continuado de un recluso de un establecimiento a otro puede tener unas consecuencias negativas para un equilibrio psíquico y físico. Incluso estos reclusos van a tener más dificultades para mantener unos contactos apropiados con su familia y su abogado. El efecto de los traslados sucesivos de un recluso podría, en ciertas circunstancias, constituir un trato inhumano y degradante.

Una materia más a la que el CPT atribuye una especial atención es la de los servicios de sanidad y también a los temas de dietética y, generalmente, a los de alimentación en las prisiones.

Este es un tema muy vasto, que el CPT irá desarrollando en próximos informes, pero las personas particularmente interesadas sobre esta materia pueden ya examinar los informes elaborados por el CPT a consecuencia de sus visitas a Austria, Dinamarca y Reino Unido, y que ya han sido publicados de conformidad con los gobiernos de esos países. Hay ya una constante en los informes del CPT en el sentido de considerar muy deseable que los servicios médicos penitenciarios estén estrechamente ligados a los servicios de salud pública de la Comunidad en general.

Por último, nunca está de más insistir sobre la gran importancia que tiene para la formación de los responsables de la aplicación de las leyes la enseñanza en materia de derechos humanos. Parece obvio mantener que la mejor garantía contra los malos tratos a las personas privadas de libertad es que haya funcionarios de policía y funcionarios penitenciarios correctamente formados. Estos funcionarios cualificados estarán en condiciones de ejercer sus funciones con éxito sin tener que recurrir a malos tratos y también estarán en condiciones de asumir la existencia de garantías fundamentales para los detenidos y para los presos.

Relacionado con todo ello, el Comité para la Prevención de la Tortura ha llegado a la conclusión de que la aptitud en las técnicas de comunicación

debería de ser un elemento determinante para el reclutamiento del personal encargado de la aplicación de las leyes y que para su mejor formación debería concedérsele una importancia particular al perfeccionamiento de la cualificación en esta materia, fundándose sobre el respeto de la dignidad humana. Esta formación permite frecuentemente a un funcionario de policía o a un empleado penitenciario desactivar una situación que podría de otra manera degenerar en violencia y, con más frecuencia, contribuir a atenuar las tensiones y a mejorar la calidad de vida en las comisarías de policía y en los centros penitenciarios.

En fin, la cuestión de la tortura está, evidentemente, en el corazón del mandato del Comité para la Prevención de la Tortura. Sin embargo, las preocupaciones del Comité no se limitan a la prevención de esta forma particularmente atroz de violación de los derechos del hombre, ya que estas preocupaciones conciernen a todas las formas de malos tratos inflingidos a todas las personas privadas de libertad.

El CPT ha sido creado para contribuir a proteger la dignidad del hombre. En sus actividades cotidianas, intenta poner en práctica y reactivar los ideales de dos pensadores del Siglo de las Luces: César de Beccaría y Emmanuel Kant. A través de su acción el CPT traduce en los hechos la rotunda condena pronunciada por Beccaría contra la tortura y las prácticas inadmisibles similares, y realizar la noción de "humanidad" propuesta por Kant.

